

CAPÍTULO QUINTO

MAGREB

MAGREB

Por Carlos Fernández-Arias Minuesa

Los principales acontecimientos mundiales que han tenido lugar durante el año 2005 han afectado de forma muy superficial a la región del Norte de África, al menos en lo que se refiere a los procesos de reformas económicas, sociales y políticas, o al ámbito de estabilidad regional. Podemos decir, arriesgándonos a que se nos juzgue de pesimistas, que el Magreb se encuentra en una fase de estancamiento, como si sus líderes se hayan mostrado incapaces de aprovechar el renovado interés que por la estabilidad y la integración regional se ha manifestado de forma creciente por parte de Europa y los Estados Unidos.

Desde el punto de vista regional, la fracasada reunión de la cumbre de la UMA, en la pasada primavera, ha puesto de manifiesto la profundidad de las diferencias políticas que separan a los cinco países del llamado gran Magreb. La relación bilateral entre Marruecos y Argelia ha seguido enfriándose por múltiples causas entre las cuales el contencioso del Sahara Occidental no sería más que una de ellas, hasta el punto de que ciertos analistas se pregunten si más que causa de diferencia política, la cuestión del Sahara no sería más que el pretexto entre los dos vecinos para no llegar a un entendimiento sobre aspectos tan trascendentes en la política de vecindad como el control de los flujos clandestinos de comercio transfronterizo, la cooperación en el control de la inmigración ilegal de origen subsahariano, o la colaboración en la lucha antiterrorista. Inexplicablemente, entre dos países que deberían compartir más que lo que pueda separarlos, las fronteras entre Marruecos y Argelia siguen cerradas desde hace más de una década. Las perspectivas de avances en la integración regional siguen siendo escasas.

Estas diferencias entre Rabat y Argel han protagonizado en gran medida la evolución del contencioso del Sahara Occidental a lo largo del pasado año. Las posiciones entre las partes –Marruecos y el Frente POLISARIO son las dos únicas partes reconocidas por las Naciones Unidas– se han enquistado haciendo imposible cualquier avance sustantivo al proceso de paz. James Baker, Enviado Especial del Secretario General de Naciones Unidas durante algo más de 7 años, dimitía en primavera 2004, sentenciando de ese modo a una muerte lenta a su Plan de Paz. El sucesor de Baker, Álvaro de Soto, apenas ha durado un año en sus funciones. A finales de año, las Naciones Unidas retomaban la iniciativa política con el nombramiento de un Enviado Especial, el embajador Van Walsum, que apenas ha podido realizar una gira de primer contacto con las partes y los países vecinos con especial interés en el contencioso. Mientras tanto, la situación interna en la región ha empeorado de modo palpable tras los levantamientos y las manifestaciones que han seguido reproduciéndose en las principales ciudades del Sahara desde el mes de mayo.

Tampoco ha contribuido a la estabilidad de la región el golpe de Estado en agosto 2005 en Mauritania, manifestación del desgaste de un régimen que desde el interior del mismo culpaba a sus gobernantes de incapacidad para garantizar la propia seguridad del mismo ante el ataque y las amenazas desestabilizadoras provenientes de grupos cuya naturaleza sigue siendo incierta. En ese mismo sentido, el incremento de actividades en toda la región del Sahel (Mauritania, Malí, Níger, sur de Argelia) de grupos armados de corte salafistas y con una más que probable conexión con Al Qaeda, son causa de especial preocupación.

Además de la perspectiva regional, analizaremos la evolución política y económica interna en cada uno de los países de la región. Como observación de carácter general puede señalarse que, al igual que ha venido sucediendo en otros países árabes, los procesos de reforma política parecen estar estancados en toda la región, y aquellas reformas anunciadas quedan bien en simples promesas, bien en decisiones cuya capacidad transformadora es más que dudosa. Desde del punto de vista de la economía, se ha producido la paradoja de que el fuerte incremento de los precios de los hidrocarburos no ha tenido una repercusión directa en la mejora de la situación económica de las poblaciones de los principales productores regionales (Argelia y Libia) aunque sí han disparado el gasto público, aumentando entre otros conceptos, la adquisición de armamento y material militar.

Ante esta perspectiva, poco propicia para el optimismo, Europa ha seguido siendo el principal referente exterior para la región aunque no el único. Las iniciativas europeas han seguido ofreciendo perspectivas de cooperación y partenariado. En primer lugar las derivadas del propio proceso euromediterráneo y de la política europea de vecindad, diseñada en ciertos aspectos para la medida de las capacidades de algunos de los socios magrebíes, Marruecos y Túnez en particular. Llama por ello la atención la ausencia de los tres jefes de Estado del Magreb en la cumbre euro-mediterránea de Barcelona en el mes de noviembre, ausencias todas ellas significativas aunque sus causas sean tan diversas como la personalidad de los líderes en cuestión. Al mismo tiempo, los Estados Unidos encuentran en el Norte de África socios idóneos para mostrar al mundo que su política de promoción de la democracia tiene cabida en el mundo árabe.

LA PERSPECTIVA REGIONAL: LA CRISIS DE LA UMA

Como hemos apuntado al inicio del capítulo, la falta de avances significativos en el proceso de integración regional ha caracterizado al Magreb durante el periodo objeto de estudio. La Unión del Magreb Árabe (UMA) es, muy probablemente, la organización regional que menos ha progresado de todas las existentes. Más de 11 años de estagnación, desde la última reunión al más alto nivel político, nos muestran que las dificultades que existían cuando se firmó la Declaración de Marrakech, en 1989, no solo subsisten sino que se han agravado.

Durante gran parte del año 2004 y la primera mitad del 2005, una sucesión de reuniones técnicas, de las distintas comisiones previstas por la organización regional, y varios encuentros ministeriales, anunciaban con cierta dosis de optimismo, trabajos preparatorios para la, tantas veces, aplazada cumbre de la UMA. La decisión de Rabat, anunciada por el Rey Mohamed VI durante la Fiesta del Trono, en julio 2004, de que Marruecos suspendía la exigencia de visado a los ciudadanos argelinos que quisieran viajar al reino alauita, abrió grandes expectativas de acercamiento entre los dos países vecinos. La respuesta, esperada por parte de Argel a este gesto de buena voluntad, de abrir las fronteras que permanecen cerradas desde 1995, no tuvo lugar. Año y medio después del ofrecimiento Real, el Presidente Buteflika sigue afirmando que no se dan las condiciones para la apertura de las fronteras. Durante todo el periodo considerado ha llamado la atención los esfuerzos de Marruecos por restablecer un nivel de relaciones diplomáticas y políticas normalizado con su vecino

argelino. El recuerdo aun reciente de la crisis diplomática con España y los mensajes que París y Washington se han esforzado en enviar parecen haber prendido en el ánimo de Rabat, pero no así en el de Argel que ha desoído todo intento de acercamiento por parte del reino alauita. Como explicaremos más adelante, Marruecos desea la normalización de las relaciones bilaterales como paso previo a una negociación directa con Argelia sobre la cuestión del Sahara. Argelia, consciente de lo anterior insiste en que no tiene responsabilidad alguna sobre el expediente del Sahara y mantiene viva la tensión bilateral. El encuentro que el rey de Marruecos y el Presidente argelino mantuvieron en marzo 2005, en Argel, al margen de la Cumbre de la Liga Árabe, hicieron pensar en un inicio de entendimiento que el tiempo ha desmentido.

Todo hacía presagiar grandes dificultades para la celebración de la cumbre UMA prevista en Trípoli los días 25 y 26 de mayo que finalmente fue suspendida. La UMA no se reúne al máximo nivel desde la Cumbre de Túnez en 1994, y sendos intentos de reactivación en 2003 y 2004 habían fracasado. Las diferencias políticas entre Argelia y Marruecos, y en particular la tensión creciente en torno al conflicto del Sahara, fueron la causa principal de la suspensión. A pocas semanas antes de la cumbre, Marruecos expresaba públicamente su malestar por el tenor de la carta de felicitación que el Presidente Buteflika envió a finales de abril al Secretario General del Frente POLISARIO, Mohamed Abdelaziz, felicitándole por el 30 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en la que recordaba el compromiso del gobierno y del pueblo argelino con la libre determinación del pueblo saharauí y daba al dirigente POLISARIO tratamiento de jefe de Estado. Poco antes, aprovechando una gira por Iberoamérica, relacionada con los intereses en el ámbito de los hidrocarburos, el presidente argelino abogaba ante sus interlocutores por la causa saharauí. Estos actos que Marruecos consideró ofensivos, impidieron la reunión de presidentes magrebíes. También llevaron a Rabat a anular una anunciada visita oficial del primer ministro argelino, Sr. Ouyahia, a Rabat en el mes de julio.

Argelia ha seguido desplegando toda su actividad diplomática a favor de la causa saharauí. En primer lugar en las Naciones Unidas, desde la privilegiada plataforma de miembro del Consejo de Seguridad, durante el periodo 2004-2005. Por otra parte aprovechando una fuerte actividad exterior centrada en la búsqueda de contactos con otros países productores de petróleo y gas natural, tanto en América latina, como en África. El resultado más llamativo fue el reconocimiento expreso de la RASD por parte de

la República Sudafricana en el mes de septiembre de 2004. Era la primera vez que un país de peso regional reconocía a la autoproclamada república saharauí desde la oleada de reconocimientos que se efectuaron a principios de los años ochenta. El último país en reconocer la RASD fue Timor, tras su independencia, en gesto de solidaridad con la que consideraban una causa semejante. Poco más tarde, en ese mismo mes de septiembre, y tras un viaje oficial a Nigeria, el presidente Buteflika firmaba con su anfitrión el presidente Obasanjo, una declaración pro-saharauí que incluía un llamamiento claro a la autodeterminación. Más tarde se uniría Kenia ante las gestiones diplomáticas de Argel. La rivalidad argelino-marroquí se decantaba en el continente africano a favor del primero. En Iberoamérica, la diplomacia argelina y la polsaria seguían cultivando los apoyos a la causa saharauí que se forjaron hace ya más de veinte años. El Secretario General del Frente Polisario efectuaba en el año 2005 su habitual gira iberoamericana y asiste a las distintas tomas de posesión presidenciales. En el continente, la Venezuela de Hugo Chávez sigue siendo su mentor más activo. A principios de 2006, Ecuador reconocía a la RASD.

A la rivalidad argelo-marroquí se une otra, menos conocida, pero no por ello menos dañina al proceso de integración regional, el contencioso que enfrenta a Libia con Mauritania, nutrido de mutuos reproches y acusaciones. La República Islámica de Mauritania es el único país del Norte de África que reconoce plenamente al Estado de Israel y ha mantenido desde entonces, sin interrupción relaciones diplomáticas plenas. Esto le ha valido a Mauritania un reconocimiento político por parte de occidente, fundamentalmente por parte de los Estados Unidos, además de beneficiarse como receptor de programas de cooperación y ayuda al desarrollo por parte de Israel. También le ha valido críticas y desencuentros con un cierto número de países árabes, pero ninguno tan agresivo como los recibidos por parte del régimen del coronel Gadafi y sus acusaciones a Mauritania y a su entonces presidente, Coronel Taya, de traidor a la hermandad árabe.

Mientras tanto, Nuakchott acusaba a Trípoli, muy posiblemente con cierto fundamento, de instigar movimientos desestabilizadores como los que desembocaron en los tres intentos de golpe acontecidos desde junio 2004. Las críticas se referían más en concreto a la financiación y apoyo político de los llamados «Jinetes del Cambio» que llegaron a ejecutar un fuerte golpe al gobierno mauritano mediante el ataque al destacamento militar acuartelado en el fuerte de Lemgheitty, cerca de la frontera norte con Malí, y una de las causas inmediatas del golpe de Estado que tuvo lugar en el mes de agosto.

EL CONFLICTO DEL SAHARA OCCIDENTAL

En todo caso, el conflicto del Sahara Occidental sigue siendo el principal argumento que impide desarrollar un proceso de integración regional y por lo tanto sentar las bases de la estabilidad política que precisa la región para su desarrollo. Utilizamos conscientemente el término argumento en lugar de causa para no descartar la tesis de quienes sostienen que el conflicto del Sahara, mas que ser el origen de las diferencias políticas entre Argelia y Marruecos, y que por lo tanto, impide avanzar en la integración, es el argumento que los dos rivales utilizan para no alcanzar un acuerdo, y mantener de ese modo y de forma artificial una rivalidad que les resulta de gran utilidad para sostener otras batallas políticas. A Marruecos le permite no desarrollar otras políticas reformistas ante el argumento de que la consolidación de la unidad territorial es la gran cuestión nacional de la que depende la estabilidad y supervivencia del sistema. Para Argelia, porque la defensa de la causa saharauí le permite ganar apoyos y legitimidad internacional que refuerza su deseada hegemonía en la región del Norte de África y del Mediterráneo Occidental.

En noviembre pasado se cumplían treinta años de la firma de los acuerdos de Madrid que ponían fin a la presencia española en el Sahara Occidental. Treinta años después, la cuestión del Sahara Occidental se encuentra enquistada y su evolución durante el año 2005 no deja demasiado espacio para la esperanza de una solución política a corto plazo.

En junio de 2004, James Baker dimitía como enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, tras siete años de dedicación al conflicto del Sahara. Algunos analistas vieron en esta dimisión el acta de defunción del que hasta ahora había sido el plan más imaginativo, y posiblemente el más viable, de los presentados hasta la fecha como solución a este largo contencioso. Dos meses antes de la dimisión, el informe del secretario general de la ONU de 19 de abril confirmaba la gravedad del diagnóstico reconociendo el estancamiento político entre las partes. Marruecos se negaba a aceptar un plan de paz que reconociera, como una de las opciones posibles al resultado final del proceso, la posible independencia del territorio. Ello dejaba poco margen para la negociación y forzaba la retirada de Baker como mediador político de Annan en el conflicto.

Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU de octubre de 2004 (1570) y de abril de 2005 (1589) fueron resoluciones técnicas, sin nin-

gún llamamiento específico a la recuperación del diálogo político entre las partes, en las que la referencia al plan de Baker era tangencial, limitándose en el preámbulo a un recordatorio genérico a las anteriores resoluciones del mismo Consejo de Seguridad. Las partes expositivas de ambas resoluciones tan sólo mencionaban la necesidad de respetar el alto el fuego y se remiten a subsiguientes informes del secretario general de la ONU en los que se evaluará la situación sobre el terreno.

Si James Baker fue rechazado como mediador político por Marruecos, lo mismo puede decirse de su sucesor, Álvaro de Soto, diplomático peruano y antiguo jefe de gabinete del entonces Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, que nunca fue considerado interlocutor político en la facilitación del diálogo por parte de Argelia y del Frente POLISARIO. En cierto modo, la decisión de Kofi Annan de subsumir en una misma persona las funciones de enviado especial, el encargado de la mediación política, y de representante personal, al principal responsable administrativo de la misión de Naciones Unidas en el Sahara Occidental (MINURSO), era en sí una muestra más de la fatiga del proceso de la ONU y de la falta de impulso que la cuestión del Sahara había sufrido desde la dimisión de Baker.

Ha sido habitual señalar a Marruecos y su rechazo al plan Baker como causa principal de la dimisión del mediador y de la situación actual de estancamiento. Sin embargo, es injusto responsabilizar en exclusiva al reino alauita del momento presente. El enquistamiento de las posiciones se explica por diversos motivos, entre ellos los condicionantes de la política exterior de los distintos actores. En el caso de Marruecos, su obsesión por conseguir una solución que preserve la idea de soberanía nacional y de integración territorial es muchas veces difícil de comprender. Sin embargo, la consolidación de la «marroquinidad» del Sahara es objetivo prioritario para el actual rey, Mohamed VI, que desearía pasar a la historia de su país como el reunificador, continuando de ese modo la tarea iniciada por su abuelo, Mohamed V, artífice de la independencia, y de su padre, Hassan II, fundador del Marruecos moderno. La solución del expediente del Sahara Occidental, que las declaraciones oficiales de Marruecos gustan en calificar de «conflicto artificial», sería por tanto cauce principal de legitimidad política de la monarquía.

En cualquier caso, el hecho que las posiciones de las partes hayan colocado al contencioso en un callejón con difícil salida no significa que no se hayan producido avances. Ya hemos mencionado los intentos de

Marruecos de acercarse diplomáticamente a Argelia para favorecer una negociación. Razón no le falta a Rabat para querer forzar una negociación con Argelia, casi todos los analistas coinciden en que Argel tiene la clave del conflicto al ser no solo quien apoya directamente al Frente POLISARIO, si no que también utiliza todos sus recursos diplomáticos en mantener viva sus reivindicaciones.

También el POLISARIO ha movido ficha, simbólica pero significativa al decidir la liberación de los prisioneros de guerra marroquíes que aun quedaban bajo su custodia en los campamentos de Tinduf. De ese modo, Marruecos conseguía una de las principales reivindicaciones en el proceso negociador y perdía, de paso, una de las causas de acusación de incumplimiento de los acuerdos de paz contra las fuerzas saharauis. Acusación más retórica que real pues en ninguno de los casos en los que, con cuentagotas y con intencionalidad política, el POLISARIO había liberado prisioneros de guerra marroquíes éstos fueron recibidos como héroes de guerra o siquiera como antiguos combatientes. Lo significativo de esta liberación es que se produce como consecuencia de una gestión diplomática de los Estados Unidos, encabezada por el Senador Lugar, quién realizó una gira por la región en agosto de 2005, visitando Argel, Rabat y Tiduf, con un mensaje personal del Presidente Bush a los principales protagonistas del conflicto. Una vez más, la intervención directa de Washington producía resultados directos, aunque modestos, cosa que ni las diplomacias española, francesa o europea habían conseguido en similares gestiones. El POLISARIO sigue confiando en los Estados Unidos como el único garante de un eventual acuerdo definitivo al contencioso.

Otro fenómeno ha introducido un elemento nuevo de tensión en el contencioso complicando, en este caso, la posición de Marruecos y su margen de maniobre política. En el mes de mayo surgían en el Aaiún y en otras poblaciones del Sahara Occidental una serie de manifestaciones y protestas, mayoritariamente de corte independentista, aunque las reivindicaciones obedecían también a una naturaleza económica y de protesta general contra la administración marroquí. Lo más sorprendente de este fenómeno es la forma rápida en que se extendió por las distintas ciudades del Sahara, desde el Aaiún a Smara, a Dahla y a otras poblaciones, incluyendo algunas situadas en la provincia meridional marroquí de Tan Tan, en lo que fue el antiguo protectorado español del sur de Marruecos, y también en numerosas universidades de Marruecos incluyendo la capital, Rabat. Las manifestaciones se caracterizaron por su intensidad en el tiempo y en la protesta y por la juventud de sus protagonistas, muchos de

los cuales habían nacido después de la marcha verde. A pesar de que los portavoces del Frente POLISARIO se esforzaron en hablar de una intifada saharauí, es más que dudoso que las manifestaciones fueran promovidas desde Tinduf, ni siquiera organizadas por los grupos polisarios que puedan existir en el territorio del Sahara. Llama la atención la espontaneidad del fenómeno y su veloz difusión a través de internet y mensajes de telefonía móvil. El Sahara, que durante años ha estado casi incomunicado por línea telefónica con el resto del mundo, ha recuperado su capacidad de comunicación exterior. A los jóvenes saharauíes se les pudieron unir hijos de la primera generación de colonos marroquíes, nacidos en el Sahara y sufriendo, como tantos otros jóvenes marroquíes los problemas del paro agravados por la falta de perspectivas similares a las que tuvieron sus padres cuando la administración marroquí los desplazó a las provincias del Sahara con los beneficios de un mejor salario y un régimen fiscal favorable.

Las manifestaciones fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad con el resultado de numerosos detenidos, algunos de los cuales ya han sido juzgados y condenados, decenas de heridos e incluso un fallecimiento que la oposición saharauí atribuye a malos tratos sufridos por parte de la policía marroquí. El fenómeno ha perdido intensidad y fuerza pero no por ello ha dejado de seguir vivo. El Frente POLISARIO ha dado la máxima publicidad a la revuelta o intifada y la actuación contundente en la represión ha levantado las críticas contra Marruecos por parte de Gobiernos y Parlamentos occidentales. Varias han sido las delegaciones que han intentado desplazarse a la región para comprobar sobre el terreno la dimensión de los hechos. Todas ellas han sido rechazadas por las autoridades de Rabat. En el caso español, hasta ocho delegaciones parlamentarias de diversa naturaleza fracasaron en su intento de visitar el Sahara por la prohibición de las autoridades marroquíes. Ni siquiera el gobierno español, aprovechando el buen estado de las relaciones bilaterales, pudo pactar con el gobierno de Rabat la organización de una delegación parlamentaria al solicitar ésta la suficiente garantía de libertad de movimientos en la investigación, lo que no fue acordado por Marruecos. Distintas ONG's de defensa de los Derechos Humanos siguen interesándose en los casos de represión y varios gobiernos escandinavos, que también han intentado desplazar sin éxito misiones diplomáticas al Sahara para efectuar valoraciones sobre el terreno, quieren plantear algún tipo de acción común de la UE ante Marruecos aduciendo que el gobierno de Rabat estaría persiguiendo a defensores de Derechos Humanos en su

propio país, lo cual podría ser objeto de acción en virtud de una de las directrices de defensa de los Derechos Humanos que inspiran la política común de la UE en esta materia. Al mismo tiempo, estos mismos gobiernos, apoyados por otros que tradicionalmente han tomado partido por la parte saharauí, se plantean la legalidad del Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos si éste permite las labores de faena en el banco pesquero saharauí.

En este estado de cosas el nuevo Enviado Personal del Secretario General de Naciones Unidas, el embajador Van Walsum, iniciaba su primera gira de acuerdo con la misión recibida de impulsar políticamente el proceso de paz. Van Walsum, antiguo representante permanente de los Países Bajos ante las Naciones Unidas, fue nombrado en agosto de 2005 y a mediados de octubre efectuaba su primera gira por la región con la intención de tomar contacto con las partes e informar al Secretario General de Naciones Unidas sobre las posibilidades de impulsar el proceso antes de que a finales de octubre el Consejo de Seguridad tuviera que pronunciarse sobre la prolongación de la MINURSO. A pesar de las reticencias de algunos de los miembros de dicho Consejo de Seguridad, en particular a la idea de los Estados Unidos de que la retirada de MINURSO forzaría a las partes ante sus propias responsabilidades y propiciaría una negociación directa, la Resolución 1634 aprobaba una nueva prórroga de seis meses al mandato de MINURSO y permitía de ese modo que el nuevo Enviado Personal pudiera trabajar con las partes y propusiera ideas para impulsar el proceso de solución política al conflicto. La presencia de Naciones Unidas en la zona quedaba de ese modo garantizada hasta abril 2006 y se solicitaba a Van Walsum un informe al Consejo de Seguridad a la mitad de dicho semestre.

A mediados de enero de 2006, el Enviado Personal, embajador Van Walsum comparecía ante el Consejo de Seguridad, en sesión a puerta cerrada, para presentar sus impresiones y apuntar las recomendaciones que propondrá a dicho Consejo antes de que vuelva a reunirse sobre la cuestión del Sahara, a finales de abril 2006. El Enviado Personal considera el Plan Baker muerto en la práctica tras el rechazo de Marruecos al mismo y la decisión del Consejo de Seguridad de no aceptar solución alguna que no tenga el consenso de las partes, según la fórmula que ha ido repitiéndose en las distintas resoluciones aprobadas desde 2004. Van Walsum no propondrá un nuevo plan de paz que sustituya al plan Baker y prefiere proponer que la solución política al conflicto sea el resultado de un acuerdo entre las partes. Por eso, su recomendación al Consejo de

Seguridad en su reunión de abril será la de solicitar de las partes, Marruecos, POLISARIO, y también Argelia, el inicio de negociaciones directas con vistas a encontrar una solución aceptable y consensuada.

Los observadores más avezados del contencioso conocen la dificultad, la imposibilidad casi de alcanzar dicho resultado si no existe una presión suficiente desde el exterior que sea capaz de impulsar la solución y garantizar su aplicación. Naciones Unidas ha demostrado su incapacidad o incluso falta de voluntad de imponer y hacer ejecutar dicha solución. Pero, estos mismos observadores coincidirán sin duda que antes incluso del resultado, las negociaciones que propone Van Walsum tendrán enormes dificultades en ser aceptadas por las partes. Marruecos está elaborando un proyecto de autonomía que tendrá el consenso de todas las fuerzas nacionales con las que el gobierno de Rabat está buscando un amplio pacto de Estado. Ello restará capacidad de negociación sobre una solución distinta de ese proyecto autonómico. Rabat tan solo consentirá negociar sobre dicha base que en ningún caso recogerá cesión de soberanía sobre el territorio. Argelia no aceptará negociar sobre un contencioso del que dice ser totalmente ajeno, como ha venido repitiendo en los últimos años. El Frente POLISARIO, por su parte, se sentirá traicionado por la Comunidad Internacional y no aceptará otra solución que la del Plan Baker que incluía la opción del referéndum con solución abierta; en ningún caso aceptará una solución que no permita, entre las fórmulas de ejercicio de la autodeterminación, la independencia.

Los países más próximos al contencioso siguen manteniendo sus posiciones tradicionales. Se ha querido ver un cierto alejamiento del gobierno español respecto de la consolidada posición de neutralidad activa que ha caracterizado la política hacia el Sahara Occidental durante las últimas décadas. Es posible que el deseo de conseguir una estabilidad regional y un proceso de integración político y económico haya inclinado la balanza hacia el campo del realismo político que exige garantizar la estabilidad de Marruecos sobre cualquier otro tipo de consideraciones, incluyendo la presión de una opinión pública que en sus diversas manifestaciones (prensa, sociedad civil, ONG's, partidos políticos) sigue siendo claramente pro-saharai. Sin embargo, la clave de la estabilidad de Marruecos puede no encontrarse necesariamente en la solución al contencioso del Sahara, y la posición de Argelia, cada vez más fuerte en su consolidación de actor regional y continental de primera magnitud, hacen difícil una solución que no cuente con la satisfacción de las legítimas aspiraciones del pueblo saharai y que Argel defiende con total determinación

MARRUECOS: SITUACIÓN INTERNA

La estabilidad ha caracterizado la vida política en Marruecos durante el periodo objeto de estudio. Diversos procesos reformistas han ido forjando lenta pero decididamente el programa de reformas políticas del Primer Ministro Jetos. Reformas que no han tenido paralelo en el aspecto económico. Las altas tasas de desempleo y la falta de resultados prácticos del programa de reformas económicas podrían ser el principal desencadenante de protestas populares a medio o largo plazo, según apuntan algunos analistas, que recogen el malestar por la falta de perspectivas en las protestas universitarias vinculadas a la causa del Sahara, a las que nos hemos referido antes.

El gobierno de Rabat ha mantenido su compromiso con el amplio y ambicioso programa de reformas políticas que inició hace ya casi dos años. Marruecos es en este sentido un ejemplo casi único (junto con Jordania y Bahrein) de país árabe empeñado en un proceso de modernización política cuyos resultados empiezan a ser palpables, y de ese modo lo reconoció el propio Presidente de los Estados Unidos en su discurso sobre el Estado de la Nación, pronunciado a principios de 2005.

Dos son las reformas más significativas en este sentido. En primer lugar la Ley que ha regulado el estatuto civil de la mujer, la «mudawana», suprimiendo instituciones tradicionales incompatibles con el principio de igualdad de género, como eran el repudio, el derecho de tutela civil de padres y maridos sobre la mujer, el divorcio, etc. Incluso los observadores más optimistas saben que esta reforma será difícil de aplicar en numerosos casos, dado el carácter conservador de la judicatura en el reino alauita, y que la diferencia entre las mujeres del medio rural y las residentes en las grandes ciudades se hará aun mayor puesto que serán estas últimas las que con más facilidad aprovecharan los beneficios que les concede la nueva ley. Sin embargo, esta reforma supone un paso enorme para un país árabe y musulmán, en un momento en el que el radicalismo religioso parece acrecentarse.

La segunda reforma en importancia y alcance político es la puesta en marcha de la instancia «equidad y reconciliación», encargada de realizar investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en Marruecos, desde la independencia del país. Los trabajos de esta instancia han sido seguidos con enorme interés por parte de la población marroquí, hasta el punto que el presidente de dicha instancia, Driss Benzekri, se ha convertido en el político más popular de Marruecos. La instancia «equidad y

reconciliación» ha realizado un trabajo similar al realizado por otras comisiones de la verdad, como las que tuvieron lugar en Argentina, Chile o Sudáfrica, aunque, a diferencia de éstas, la experiencia marroquí se produce en el marco de un proceso de reformas políticas, sin que haya tenido lugar un cambio violento o revolucionario del régimen político.

El Rey Mohamed VI, decidió la creación de esta instancia, en 2003, para investigar desmanes y violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante el reinado de su padre, Hassan II. La instancia presentó sus conclusiones en el mes de junio, y en ellas se reconocían violaciones graves de derechos humanos, desde la represión de las revueltas del Rif, hasta los disturbios urbanos de los años 70, y los distintos ajustes de cuentas contra los opositores o quienes atentaron contra el entonces monarca. La participación ciudadana ha sido notable, con más de 60.000 escritos recibidos por parte de supuestos agraviados y, a pesar de que las conclusiones de los trabajos han sido resultado de compromisos políticos y complejos equilibrios, éstas no han ocasionado más conmoción que las que hubieran acontecido en las sociedades occidentales, lo cual ha sido mostrado como ejemplo de la madurez de una sociedad que quiere mirar más hacia el futuro que hacia el pasado.

Estas importantes reformas se producen en un país en el que el partido islamista «justicia y democracia» (PJD) ha seguido siendo la principal fuerza de oposición parlamentaria después de que fuera el partido más votado en las elecciones que tuvieron lugar en el año 2002. Es cierto que el peculiar sistema político de Marruecos, en el que el parlamentarismo formal queda atenuado por unos amplios poderes del Jefe del Estado, que puede designar a su Primer Ministro sin atender necesariamente a la correlación de las fuerzas políticas electas (recordemos que Driss Jettou es una figura políticamente independiente) y que tiene la potestad de nombrar directa y personalmente a los llamados Ministros de soberanía (exteriores, interior, justicia y asuntos religiosos) permite la formación de equilibrios desde la propia monarquía. Sin embargo, no es menos cierto que el ejercicio de la política, aun desde la oposición, de los islamistas del PJD, ha permitido a este partido ampliar su base de poder, recabar apoyos populares y disipar dudas y fantasmas sobre sus intenciones. Tanto es así, que el gran desafío político de Marruecos surgirá cuando tras las elecciones del año próximo, el PJD alcance una mayoría parlamentaria lo suficientemente amplia como para que el monarca se vea en la disyuntiva de encomendarles tareas de gobierno. Pocos son los que temen hoy esa posibilidad, bastante real a tenor de las encuestas de intención de voto.

Muy posiblemente, la experiencia del poder por parte de un partido islamista en un país que ha acometido reformas institucionales que han estabilizado el sistema político y han hecho madurar a su clase política y a las crecientes clases medias urbanas, y que cuenta con un sistema en el que la jefatura del Estado asume en su persona el liderazgo religioso del país como «comendador de los creyentes», será distinto que en otros países del mundo árabe en que el islamismo ha surgido como principal fuerza política. No obstante la reflexión anterior, el fantasma de los atentados de mayo 2003 en Casablanca sigue alimentando la principal preocupación de las autoridades de Marruecos en el ámbito de la seguridad. Y aunque el riesgo sea moderado, la posibilidad de que otra célula terrorista actúe en Marruecos sigue siendo considerada como la peor de las amenazas a la seguridad nacional. Mientras tanto, el ilegalizado movimiento islamista «al-Adl wal-Ishane» (justicia y caridad) del jeque al-Jassin, sigue contando con un amplio apoyo popular. El reciente llamamiento a una forma republicana de Estado por Nadia Bassin, hija y posible sucesora del líder de dicho movimiento no ha sido considerado lo suficientemente grave como para poner en peligro la popularidad del Rey Mohamed VI que sigue contando con un muy elevado grado de apoyo y respeto entre sus súbditos.

ARGELIA

La estabilidad política, reforzada por unos sólidos ingresos económicos a raíz del elevado precio internacional de los hidrocarburos, y la creciente popularidad personal de la que sigue gozando el Presidente de la República, Abdelaziz Buteflika, conforman el panorama de un país que ha seguido consolidando su presencia internacional y su protagonismo como actor regional de primer orden.

Buteflika, actor presente en primera línea de la vida política argelina desde la independencia del país, ha conseguido consolidar su poder desde que consiguió la dirección del Frente de Liberación Nacional (FLN) y ganar con mayoría absoluta las elecciones presidenciales de abril 2004. Desde ese momento, el afán político del Presidente ha sido el de cerrar capítulo e iniciar una nueva etapa política que selle definitivamente las heridas aun abiertas por la sangrienta guerra civil y los oscuros años del terrorismo de la década de los años 90. Nueva etapa que no ha querido ser de ruptura con ningún régimen sino de consolidación de su primera etapa de gobierno desde 1999 y la política de reconciliación nacional iniciada entonces.

La primera decisión de calado político afectó a las Fuerzas Armadas y, más particularmente, a la cúpula militar, consideradas tradicionalmente como el auténtico poder en la sombra, y que desde 1992 venían ejerciendo amplias responsabilidades de gobierno. La amplia mayoría obtenida permitió que Buteflika se sintiera con fuerzas para destituir al todo poderoso Jefe de las Fuerzas Armadas, General Amari, a finales de julio 2004. Esta decisión fue seguida por la creación de la figura del Ministro Delegado para la Defensa directamente dependiente del Presidente, lo que permitía al Presidente un hilo directo en el control del ejército. Estos cambios no han apartado a los militares de ciertos resortes del poder y siguen conservando importantes intereses en los sectores públicos de la economía como la banca.

Por otra parte, Buteflika ha querido consolidar su poder y su respaldo popular con un nuevo y decisivo paso adelante en la política de reconciliación nacional iniciada en el año 2001 a través de la Comisión Nacional Consultiva de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Esta vez, el Presidente ha prometido definitivamente pasar página a la negra historia de la guerra sucia (150.000 muertos, cientos de miles de desplazados y exiliados y 20.000 desaparecidos aun sin aclarar). A finales de 2004, Buteflika anunciaba su intención de aprobar mediante referéndum una Ley de Amnistía general.

Los detractores de la política de Buteflika, en particular la muy activa Liga argelina de Defensa de los Derechos Humanos, y otras ONG's han criticado esta y otras decisiones al igual que criticaron en su día los trabajos de la Comisión Nacional que ha minimizado por todos los medios la eventual responsabilidad del Estado en las desapariciones y la investigación de las actuaciones del ejército en posibles crímenes de guerra.

El terrorismo y la violencia de naturaleza islamista es el otro frente que sigue abierto y activo aunque con menor virulencia que en el pasado. El apoyo popular que muchos de estos grupos tuvieron en el pasado ha ido desapareciendo, y hoy en día es difícil distinguir las acciones de terrorismo de las de simple bandidismo llevado a cabo por grupúsculos aislados y refugiados en las zonas montañosas que recurren al robo y al asesinato como único medio de supervivencia.

En cualquier caso, los elevados ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo y gas natural, la llegada de la inversión exterior atraída por las políticas lentas pero constantes de liberalización de sectores públicos, y la cada vez más activa diplomacia del Presidente Buteflika ante las

principales potencias mundiales –Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia– los foros multinacionales como Naciones Unidas, de cuyo Consejo de Seguridad formó parte durante el bienio 2003-2004 o como el G-8, así como en el mundo árabe y en el continente africano, del que Argelia se ha convertido en principal impulsor junto a Sudáfrica y Nigeria, han otorgado al régimen del Presidente Buteflika una legitimidad renovada ante sus electores y una credibilidad de socio y actor de primer orden ante la comunidad internacional.

TÚNEZ

A diferencia de sus vecinos magrebíes, el régimen del Presidente Ben Ali se ha caracterizado por una total ausencia de voluntad reformadora. Muy al contrario, los principales esfuerzos políticos de Ben Ali y su gobierno se han dirigido a consolidarse en el poder a través de las instituciones que se aprobaron en la reforma constitucional del pasado año, que suspendían la limitación temporal para la elección del Presidente, o que establecían una nueva cámara alta en el sistema parlamentario, cuyos miembros son elegidos directa o indirectamente por el propio Presidente de la República.

Al mismo tiempo, el Presidente ha seguido empeñado en limitar al mínimo la oposición política y la libertad de prensa. El resultado de las elecciones Presidenciales de octubre 2004 otorgaba a Ben Ali una victoria con el 94,48% de los votos emitidos; a las críticas recibidas, el propio Ben Ali no tenía reparos en recordar que en los últimos comicios había obtenido casi el 99% de los sufragios y que esa leve disminución en más de 4 puntos y medio era la prueba de la existencia de una oposición libre.

El gobierno tunecino ha estado sometido a presiones por parte de occidente, especialmente por parte de los Estados Unidos y, en menor medida, por parte europea, para que emprenda las reformas políticas que corresponden al que siempre ha sido el más occidentalizado de los países del Magreb. No parece probable que estas presiones tengan éxito, salvo en algún gesto aislado. Internamente, la sociedad tunecina, orgullosa de los avances obtenidos en las últimas décadas en materia de educación, igualdad e integración social y laboral de la mujer, y paulatina modernización de los usos sociales, no parece plantear deseos ni peticiones de reforma. La apatía de la sociedad tunecina se explicaría por el hecho de que conceda mayor importancia a la estabilidad política y la

prosperidad económica que al deseo de mayores cotas de libertad y democracia. Es precisamente el argumento de la seguridad el preferido por el gobierno de Ben Ali para limitar los espacios de libertad tanto a la prensa como a las formaciones políticas de oposición.

Políticamente, todo permite prever un período de estabilidad en Túnez. Sin embargo, el desempleo ha venido creciendo en los últimos años y, aunque la inversión extranjera sigue afluyendo al ritmo lento de las liberalizaciones, la competencia de los mercados de oriente y la falta de integración magrebí podrían afectar a la economía tunecina. En caso de crisis, las demandas económicas de la población podrían encontrar eco en las voces más críticas y forzar a medio plazo la apertura del régimen. Mientras tanto, en Túnez siguen circulando rumores sobre la posible enfermedad del presidente y la dificultad de articular una sucesión para la que no existen candidatos claros.

LIBIA

El régimen de Libia sigue siendo el más enigmático y el menos predecible de todo el Norte de África. En septiembre 2005, el coronel Gadafi cumplía 36 años en el poder y nada ni nadie parece desafiar su liderazgo. La sucesión sigue siendo una incógnita, aunque cada vez son mayores los signos que apuntan a la preparación de alguno de sus hijos para tomar el relevo del poder.

Tras el golpe de efecto del año 2003 en el que Gadafi renunciaba formalmente a las armas de destrucción masiva, y al apoyo al terrorismo, al tiempo que saldaba las distintas deudas reclamadas por distintos países por la participación Libia en atentados terroristas (Lockerbie, caso de la discoteca La Belle en Berlín, derribo del avión de UTA, etc.), el líder libio ha llevado a cabo una intensa actividad internacional intentando dirigir iniciativas regionales en un intento de recuperar protagonismo internacional. De ese modo organizaba en Sirte la quinta cumbre de la Unión Africana y la fracasada cumbre de la UMA, ya mencionada.

Sin embargo, ha sido el progresivo acercamiento y normalización de relaciones con los Estados Unidos el principal logro de la diplomacia de Gadafi en los últimos tiempos. Aun persisten las dificultades legales y las desconfianzas políticas, sin embargo, Libia desea la inversión americana y las reservas y la calidad del crudo libio son suficientemente atractivas, como para fomentar dicho acercamiento. Sin embargo, las relaciones con

la Unión Europea siguen sin avanzar a causa del rechazo libio al proceso euromediterráneo y por la falta de avances satisfactorios en la solución al caso de las enfermeras búlgaras acusadas por Libia de contaminar a una serie de niños de Bengasi con el virus HIV.

LA POLÍTICA EXTERIOR DE ESPAÑA HACIA EL MAGREB

El gobierno de Rodríguez Zapatero, desde el primer momento, ha considerado las relaciones con el Magreb como una de las prioridades de su política exterior. Ya en su primer viaje a Marruecos, apenas una semana después de la toma de posesión, el Presidente del Gobierno recordaba esta prioridad que, desde entonces, ha sido recordada en cada ocasión por el titular de Asuntos Exteriores y por los demás miembros del Gobierno. El Ministro Moratinos ha insistido, además, en el carácter global de la política española hacia el Norte de África. En ese sentido, dicha política es continuidad de la iniciada a principios de los años noventa, durante los últimos gobiernos de Felipe González, cuando el actual Ministro de Asuntos Exteriores era Director General de África en el departamento. Sin embargo, esta política global que reconoce la importancia estratégica de la región magrebí para los intereses españoles y desea promover las mejores relaciones posibles con cada uno de los países que la componen, sin buscar equilibrios ni alianzas tácticas, fue seguida con mayor o menor fortuna desde 1996 hasta el 2004, durante los dos gobiernos de Aznar. La única quiebra de este deseo de desarrollar una política regional global y equilibrada fue la crisis política y diplomática con Marruecos que, en su sentido más estricto, se extendió desde la llamada a consultas al embajador en octubre 2001 hasta la Reunión de Alto Nivel hispano-marroquí celebrada en diciembre 2003. Es cierto que durante estos dos años largos se intensificaron las relaciones bilaterales con Argelia, y con los demás países de la Región con los que se celebraron reuniones al más alto nivel político, y que tanto la visita de Estado del Presidente Buteflika a España, en octubre 2002, como la firma con Argelia de un Tratado de Amistad Buena Vecindad y Cooperación similares a los existentes con Marruecos y Túnez, significaron un fuerte impulso a las relaciones bilaterales y quisieron ser vistas como un intento de compensar o de cubrir el hueco que dejaba vacío Marruecos durante la crisis, sin embargo, no es menos cierto que tanto la visita de Estado, como la negociación del Acuerdo eran proyectos que venían preparándose desde mucho antes que estallara la crisis con Marruecos, y que tienen su origen en el viaje oficial efectuado a Argel en verano del año 2000.

El episodio de la crisis hispano-marroquí, sobre el que no insistiremos, es significativo sobre la enorme dificultad para España de llevar a cabo una política magrebí equilibrada y global, teniendo en cuenta el gran peso específico que Marruecos ha tenido, tiene y tendrá en dicha política. De ese modo, resulta paradójico que las intenciones declaradas por el actual Gobierno se han visto superadas en la realidad concediendo a Marruecos un espacio de primer orden que otros países de la región pueden considerar desequilibrado en menoscabo de las relaciones con ellos. En cualquier caso, y con independencia del deseo político del Gobierno de reforzar una relación estratégica como es la hispano marroquí, ya sea por consolidar la normalización de relaciones que se inició, es de justicia reconocerlo, a finales del último gobierno Aznar. En los dos primeros años de legislatura, los principales esfuerzos hacia el Norte de África se han concentrado en Marruecos, principalmente en torno a gestos políticos de envergadura como el viaje de Estado de SS MM los Reyes, las visitas que han realizado la gran mayoría de los miembros del Gobierno, o la reactivación del Comité Averroes, encargado de presentar iniciativas para el mejor conocimiento mutuo entre las respectivas sociedades civiles.

Esta política ha sembrado dudas sobre un posible cambio de orientación de la política de España respecto del conflicto del Sahara Occidental, pero como hemos visto antes, esta no solo no ha cambiado en lo esencial, sino que el margen de maniobra para un eventual cambio de rumbo de la misma queda limitado por las posiciones de una opinión pública y una clase política, desde el PP hasta IU, pasando por el PSOE y los partidos nacionalistas, marcadamente pro-saharai. A pesar de que los contactos con el Frente Polisario se han incrementado, incluidos los primeros desplazamientos de alto nivel (Secretario de Estado) a los campamentos de Tinduf, ha aumentado el escepticismo y cierta falta de confianza por parte de la parte saharai que percibe que la política de gestos políticos hacia Marruecos y el acercamiento a Francia han desequilibrado la tradicional neutralidad activa que ha caracterizado la política española desde el inicio del conflicto. También Argelia ha desconfiado de las auténticas intenciones del gobierno español, aunque ello no ha interferido en lo esencial de las relaciones bilaterales.

Sin embargo, es el hecho de que los principales responsables de los atentados terroristas del 11 de marzo 2004 fueran de origen magrebí, y el desafío de la inmigración ilegal que llega a España a través del Norte de África, los principales desafíos a la seguridad que conforman la necesidad de una política magrebí centrada en fomentar la estabilidad, el desarrollo

y la cooperación con los países de la región. En los últimos meses se han consolidado muchos de los instrumentos de cooperación con Marruecos, Argelia y Mauritania en los ámbitos de la cooperación en la lucha antiterrorista y en la política migratoria. Sin embargo el desafío trasciende el ámbito regional y enfrentarse al mismo requiere muchas veces un planteamiento continental o global. Esta idea es la que fundamenta el proyecto de celebrar una conferencia euroafricana que tendrá lugar en Rabat a principios del verano próximo reuniendo a los principales países de origen de las rutas migratorias, en África Occidental, de tránsito en el Magreb y de destino en la Unión Europea. El éxito de esta conferencia dependerá, en gran medida, que los dos grandes rivales magrebíes, Marruecos y Argelia, sepan ponerse de acuerdo en la necesidad de cooperar ante un desafío que afecta a todos. De producirse satisfactoriamente dicha cooperación, se habrá allanado un paso más en el camino de la total reconciliación de nuestros dos principales vecinos al otro lado del Mediterráneo.

CONCLUSIÓN

Hoy más que nunca resulta difícil contemplar la región del Norte de África desde un punto de vista unitario. El proceso de integración regional que según numerosos analistas sería la clave de la estabilidad y el despegue económico de la región, se encuentra más paralizado que nunca. Pocas veces, en una misma región podemos encontrarnos con países vecinos que emprenden sus trayectorias políticas sin tener en cuenta a sus vecinos, cuando no compitiendo ferozmente con ellos o interponiéndose en sus avances.

A la vista de los desarrollos recientes en los países de la región podemos encontrar, sin embargo, algunos rasgos comunes en todos ellos. El más llamativo es el del compromiso de cada uno de aquellos gobiernos en un proceso de reformas político y un acercamiento a Occidente, principalmente a Europa, pero también a los Estados Unidos, donde encuentran sus mercados naturales y buscan alianzas internacionales. Pero al mismo tiempo, cada uno de estos procesos de reforma tiene su límite en el deseo de los gobernantes de consolidar su poder y garantizar una sucesión controlada cuyas fórmulas no ha sido siempre resuelto.

Por otra parte, un segundo rasgo común sería la presencia de fenómenos, que siendo los mismos, amenazan con mayor o menor intensidad la estabilidad de cada uno de estos países. El riesgo más grave sería el

del terrorismo, que ha golpeado con dureza en cada uno de los Estados magrebíes cuya represión sigue siendo utilizada como pretexto para retrasar la puesta en práctica de ciertas libertades básicas consustanciales a la democracia. El radicalismo religioso existe en todo el mundo árabe, sin embargo, es en el Magreb donde aparece más contenido o encuentra cauces de manifestación política aceptados por los sistemas políticos. No es de extrañar que la oleada de reacciones populares que se desató a raíz de la cuestión de las viñetas sobre el profeta Mahoma en la prensa danesa haya tenido una manifestación popular y oficial mucho más moderada en el Magreb que en Oriente Medio. La presencia de más de cinco millones de inmigrantes magrebíes en países de la UE no es ajena a este hecho.

La segunda amenaza es el fenómeno imparable de los flujos migratorios procedentes de África subsahariana que encuentran en el norte de África no sólo un espacio en el que esperar el salto hacia Europa cuando no un lugar en el que quedarse. Durante mucho tiempo el Magreb ha sido considerado lugar de tránsito de la inmigración que se dirigía a Europa y a Europa exigían los gobernantes magrebíes responsabilidad en el control de dichos flujos. Hoy en día, con unas fronteras europeas cada vez mejor vigiladas, los países del Norte de África han tenido que asumir responsabilidades para las que carecen de los instrumentos adecuados, como se pudo comprobar recientemente en el lamentable incidente de las vallas de Ceuta y Melilla.

Por último, el gran desafío pendiente sigue siendo el de la modernización. Las apuestas políticas han sido hechas, las transformaciones sociales podrán llegar poco a poco pero ninguna de las dos se consolidará en un éxito estable si no vienen acompañadas de las adecuadas reformas económicas que implican no sólo avanzar en el proceso de liberalización y apertura de mercados sino también en combatir los malos usos, el clientelismo y la corrupción que siguen ahogando todo intento de conseguir en el norte de África sistemas abiertos capaces de afrontar el reto de la globalización.